

SSS



449

RESOLUCIÓN No. _____

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPUSIERON UNA SANCIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES."

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA No. 067 DE 2000.

(Bogotá, D.C., _____)

EL ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial las atribuidas en el Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 53 del Decreto 854 de 2001, Ley 232 de 1995 y artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y considerando,

1.- COMPETENCIA DE ESTE DESPACHO

Que a través del Decreto Distrital 378 del 18 de julio de 2017, se suspendió temporalmente la facultad otorgada mediante el artículo 8° del Decreto Distrital 101 de 2010 al Alcalde Local de Barrios Unidos y se delegó en el Alcalde Local de Chapinero la función de contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.

Que mediante Decreto Distrital 548 del 12 de octubre de 2017, decretó lo siguiente:

"Artículo 1°. – Dejar sin efectos los Decretos 378 del 18 de julio de 2017 y 485 del 18 de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

Artículo 2°. – Suspender temporalmente la facultad delegada mediante artículo 8° del Decreto Distrital 101 de 2010 al Alcalde Local de Barrios Unidos.

3°. - Delegar temporalmente, en el Alcalde Local de Santa Fe, la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos que esté vigente. (...).

Que en virtud de lo anterior el suscrito Alcalde Local de Barrios Unidos mediante memorando No. 20176220011173 dirigido al Subsecretario de Gestión Local doctor IVAN CASAS RUIZ, elevo la siguiente solicitud, "Comendidamente, solicito me informe quien tiene la competencia para firmar el acto administrativo mediante el cual "SE ORDENA EL SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE UNAS PARTIDAS CONTABLES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS", así mismo, las Resoluciones que "DECLARAN LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPUSIERON UNA SANCIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES": Lo anterior teniendo en cuenta que para esta Localidad quien esta como ordenador del gasto es el doctor GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES y el suscrito me reintegre como Alcalde Local el 19 de Diciembre de 2017."

Que en respuesta de la anterior solicitud la Directora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno a través del memorando No. 20171800552593 emitió el siguiente concepto:

28

RESOLUCIÓN No. _____

(...)

El Alcalde Local es la primera autoridad Administrativa y Policiva de la Localidad y adicional a ello, recibe la delegación de la representación legal del respectivo Fondo de Desarrollo Local, pero para el caso que nos ocupa, la facultad legal como Alcalde Local que deviene del Decreto Ley 1421 de 1993, le corresponde al doctor Zico Antonio Suárez Suárez, con todas sus atribuciones como autoridad Administrativa y Policiva, mientras que el Alcalde local de Santafé, Doctor Gustavo Niño Furnieles, recibe la delegación conferida por el Alcalde Mayor conforme a las atribuciones otorgadas por el Decreto Distrital 548 de 2017.

La distinción radica en que el Alcalde Local de Santafé, recibe por delegación expresa, las atribuciones contempladas en el artículo 3° del Decreto Distrital 548 de 2017, que son: "(...) la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, de acuerdo con la estructura establecida en el Plan de Desarrollo Local que esté vigente.", temas que nada tiene que ver con las funciones como Alcalde Local, que son Administrativas y Policivas.

Corresponde al Alcalde Local, Doctor Zico Antonio Suárez Suárez, suscribir los mencionados actos administrativos como primera autoridad administrativa de la Localidad de Barrios Unidos.

(...)

Que con fundamento en el concepto que antecede emitido por la Directora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, se procederá a realizar el correspondiente análisis respecto de la figura jurídica que declaran la Pérdida de Fuerza Ejecutoria, y se adoptara la decisión que en derecho corresponda.

2.- ANTECEDENTES

Se inició la actuación administrativa No. 067 de 2000, por auto del 24 de mayo de 2000, en contra del establecimiento de comercio denominado "KERRIS", ubicado en la carrera 33 No. 91A-26 primer piso, de propiedad y/o representado legalmente por la señora DIANA FERNANDA MOGOLLON CHAVEZ, identificada con C.C. No. 39.773.684 de Usaquén, por presunta infracción al régimen contemplado en la Ley 232 de 1995, reglamentada por el Decreto Nacional 1879 de 2008, para su apertura y operación. (fl 2).

Mediante Resolución No. 0282 calendada del 05 de diciembre de 2002, la Alcaldía Local de Barrios Unidos, resolvió:

"Imponer a la señora DIANA FERNANDA MOGOLLON CHAVEZ, identificada con C.C. No. 39.773.684 de Usaquén, en su calidad de propietaria y/o quien haga sus veces del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 33 No. 91 A - 26 piso 1°, de esta ciudad, destinado a la actividad de venta de comestibles y gaseosas, multas sucesivas de medio salario mínimo legal mensual vigente, equivalente a Ciento Cincuenta Cuatro Mil Quinientos pesos (\$154.500,00) m/cte, por cada día de incumplimiento y hasta por término de treinta días calendario, que deberán ser cancelados en la Tesorería Distrital a favor del fondo de Desarrollo Local" (folio 16,17 y 18).

886



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Barrios Unidos

RESOLUCIÓN No. _____

La anterior resolución fue notificada de manera personal a la encartada el día 03 de marzo de 2003, según consta en el anverso a folio 17, quien dentro del término legal interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, medios defensivos que fueron resueltos a través de la Resolución No. 373 de fecha 01 de agosto de 2003, de manera desfavorable el primero y concediendo el segundo ante el Consejo de Justicia de Bogotá.

El Consejo de Justicia de Bogotá al desatar el recurso de apelación interpuesto en subsidio, mediante acto administrativo No. 640 del 31 de mayo de 2005, resolvió modificar la Resolución No. 0282 calendada diciembre 05 de 2002, en los siguientes términos:

"Imponer multas sucesivas por un valor de cinco (5) salarios diarios legales vigentes para el año de dos mil dos (2002, por cada día de incumplimiento hasta un máximo de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de este acto al señor (sic) DIANA FERNANDA MOGOLLON CHAVEZ, identificado (sic) con C.C. No. 39.773.684 de Usaquén, de conformidad con la parte motiva de esta providencia"

El mencionado acto administrativo fue notificado por edicto fijado el día 11 de julio y desfijado el día 25 de julio de 2005, respectivamente, quedando en firme y debidamente ejecutoriada el día 26 de julio de 2005, de conformidad con lo establecido en el numeral 1°, artículo 62 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

Continuando con el trámite legal correspondiente esta Alcaldía mediante auto calendado 25 de agosto de 2005, liquidó la multa impuesta mediante la Resolución No. 0282 del 05 de diciembre de 2002, que impuso la sanción, modificada por acto administrativo No. 640 del 31 de mayo de 2005, expedido por el Consejo de Justicia de Bogotá, liquidación que arrojó la suma equivalente a UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE, (\$1.545.000,00).

3.- FUNDAMENTOS JURIDICOS

Previo a adoptar la decisión correspondiente respecto a la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 0282 del 05 de diciembre de 2002, que impuso una sanción a título de multa y del acto administrativo No. 640 del 31 de mayo de 2005, expedido por el Consejo de justicia de Bogotá, que la modificó, es necesario establecer de manera preliminar la norma sustancial administrativa aplicable al presente caso, pues ella determinará el fundamento jurídico de este acto administrativo, en ese orden de ideas, es conveniente traer a colación el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPACA, norma que contiene el régimen de transición y vigencia del nuevo Código respecto a la norma anterior (Decreto- Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), veamos:

"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente lev seguirán rigiéndose v culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior". (Subrayas y negritas no son del texto original).

RESOLUCIÓN No. _____

Así las cosas, atendiendo al contenido de la disposición antes transcrita, resulta evidente que el régimen jurídico administrativo aplicable a la presente resolución es el dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, por cuanto el procedimiento administrativo sancionatorio referido en el acápite de "Antecedentes", inició mediante auto del 24 de mayo de 2000, esto es, bajo la vigencia de la precitada normatividad.

Ahora bien, es preciso indicar que el Código Contencioso Administrativo -Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones, en su artículo 66, establece lo siguiente:

"Artículo 66: Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

1o) Por suspensión provisional.

2o) Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3o) Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4o) Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto,

5o) Cuando pierda su vigencia". (Negrilla y subrayas son nuestras).

Debe indicarse que el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, fue objeto de examen de constitucionalidad mediante la Sentencia C-069 de 1995, siendo Magistrado Ponente el Doctor Hernando Herrera Vergara, y en la cual se dispuso:

*"...De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; **por el transcurso del tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos;** por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo)..." (negrilla es nuestra).*

En especial, sobre la causal 3° del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, la mencionada providencia, indicó:

"...Referente a la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos "cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos" y "cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto", de que tratan los numerales 3° y 4° del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, materia de la demanda, estima la Corporación que dichas causales se ajustan al mandato contenido en el artículo 209 de la Carta Política, según el cual la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, correspondiendo a las autoridades administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Finalmente cabe advertir que la causal de pérdida de fuerza ejecutoria cuando no se realizan los actos que correspondan para ejecutarlos, constituye ciertamente una garantía de los particulares, frente a la desidia por parte de la administración para poner en ejecución sus propios actos."...



25 OCT 2017

449

552

RESOLUCIÓN No. _____

En similar sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado -Sección Cuarta, en sentencia dictada dentro del Radicación No. 25000-23-27-000-2000-00959-01 (14438) del 12 de octubre 2006, Consejero Ponente: Doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, veamos:

"...Un acto administrativo pudo haber sido expedido con el cumplimiento de todos los requisitos para producir efectos, tener carácter ejecutivo y en tal sentido ser obligatorio tanto para la administración como para los administrados, sin embargo, por alguna circunstancia la Administración ya no puede ejecutarlo, (por transcurso del tiempo, por decaimiento, entre otros) en este caso es cuando se habla de la pérdida de fuerza ejecutoria de ese acto, institución consagrada en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes términos:..." (subrayado es nuestro)

Aunado a lo anterior el Código Contencioso Administrativo, establece que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, así, las Autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos en virtud del principio de celeridad.

Así mismo, conforme a la doctrina contenciosa administrativa sentada por el Consejo de Estado, se debe tener en cuenta que la validez del acto administrativo es un fenómeno de contenidos y exigencias del Derecho para la estructuración de la decisión administrativa, y de otro lado, la eficacia es una consecuencia del acto administrativo que lo hace capaz de producir sus propios efectos jurídicos.

Por tanto, una vez expedido y notificado o publicado el respectivo acto administrativo, pueden presentarse fenómenos que alteran su normal eficacia, los cuales son conocidos dentro de nuestra legislación como eventos de pérdida de fuerza ejecutoria, en los términos establecidos en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

Es de iterar que la pérdida de fuerza de ejecutoria no supone que se dude de la validez del acto administrativo sobre el cual recae ésta, sino que establece la pérdida de capacidad de ejecutoriedad del acto, por lo cual no puede generar efectos jurídicos a futuro, tal como lo ha manifestado en la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de febrero 18 de 2010 (C. P. dr, Enrique Gil Botero, No.1100103260002007-00023-00 (33934)), en la cual señala:

"Este fenómeno constituye una vicisitud que afecta la eficacia del acto administrativo y no su validez, de allí que ya no es posible hacer cumplir su contenido por haber desaparecido su carácter obligatorio".

En este sentido el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, permite establecer el alcance y carácter "ejecutivo" de los actos administrativos.

Al respecto el Consejo de Estado -Sección Cuarta, en fallo de octubre 12 de 2006. C.P. dr., Juan Ángel Palacio Hincapié, rad. No. 250002327000200000959-01, manifestó:

"... El artículo 64 del Código Contencioso Administrativo (Carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos) señala que "salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Barrios Unidos

RESOLUCIÓN No. _____

misimos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento.

La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados".

Sostiene esa Corporación que dicha norma contiene dos aspectos fundamentales tanto de los actos administrativos como del ejercicio de la función administrativa, el primero, el correspondiente a la ejecutividad, que no es otra cosa, que la aptitud e idoneidad del acto administrativo para servir de título de ejecución y el segundo, la ejecutoriedad, que consisten en la facultad que tiene la administración para, que por sus propios medios y por sí misma, pueda hacerlo cumplir, que sus efectos se den hacia el exterior del acto.

Un acto administrativo pudo haber sido expedido con el cumplimiento de todos los requisitos para producir efectos, tener carácter ejecutivo y en tal sentido ser obligatorio tanto para la administración como para los administrados, sin embargo, por alguna circunstancia la Administración ya no puede ejecutarlo, (por transcurso del tiempo, por decaimiento, entre otros) en este caso es cuando se habla de la pérdida de fuerza ejecutoria de ese acto, institución consagrada en el ya transcrito artículo 66 del C.C.A., la mencionada figura está referida específicamente a uno de los atributos o características del acto administrativo, cual es la de la ejecutividad del mismo, es decir, la obligación que en él hay implícita de su cumplimiento y obediencia, tanto por parte de la Administración como de los administrados en lo que a cada uno corresponda.

4.- CASO CONCRETO

Revisados los antecedentes identificados en el expediente No. 067 de 2000, en el cual obran las actuaciones concernientes al proceso sancionatorio iniciado en contra de la señora DIANA FERNANDA MOGOLLÓN CHAVEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.773.684 de Usaquén, en calidad de propietaria y/o representante legal del establecimiento denominado "KERRIS", ubicado en la carrera 33 No. 91A-26 de Bogotá, se encuentra que dicho procedimiento sancionatorio fue resuelto mediante la Resolución No. 0282 del 05 de diciembre de 2002, a través de la cual se le impuso una sanción a título de multa la cual fue modificada en sede de apelación por el Consejo de Justicia de Bogotá, mediante acto administrativo No. 640 del 31 de mayo de 2005, actos que tienen constancia de ejecutoria de fecha 30 de octubre de 2007 (fl. 93).

Si bien la Resolución No. 0282 del 05 de diciembre de 2002, que impuso la sanción a título de multa a la señora DIANA FERNANDA MOGOLLÓN CHAVEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.773.684 de Usaquén, modificada en sede de apelación por el Consejo de Justicia de Bogotá, mediante acto administrativo No. 640 del 31 de mayo de 2005, goza de sus atributos de existencia y de eficacia, este Despacho considera procedente evaluar, si a la fecha ha operado la pérdida de la fuerza ejecutoria sobre los citados actos administrativos.

En virtud a expuesto, dentro de la valoración que se está realizando en el presente asunto, se evidencia que la fecha en que quedó ejecutoriada la Resolución No. 0282 del 05 de diciembre de 2002, que impuso la sanción a título de multa a la señora DIANA

6

558

449



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Barrios Unidos

RESOLUCIÓN No. _____

FERNANDA MOGOLLÓN CHAVEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.773.684 de Usaquén, modificada en sede de apelación por el Consejo de Justicia de Bogotá, mediante acto administrativo No. 640 del 31 de mayo de 2005, según los preceptos establecidos por el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, fue el día 26 de julio de 2005 (día siguiente a la desfijación del edicto), fecha que debe tenerse como referencia para efectos de contabilizar el término establecido en el numeral 3° del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo -Decreto - Ley 01 de 1984, el cual corresponde a cinco (5) años, lapso dentro del cual la administración debió ejecutar los actos administrativos para alcanzar su cumplimiento, so pena de configurarse la causal de pérdida de fuerza ejecutoria.

Como quiera que se observa que dentro de la actuación objeto de este análisis, ha transcurrido un término superior a los cinco (5) años desde la fecha en que quedó en firme la Resolución No. 0282 del 05 de diciembre de 2002, que impuso la sanción a título de multa a la señora DIANA FERNANDA MOGOLLÓN CHAVEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.773.684 de Usaquén, modificada en sede de apelación por el Consejo de Justicia de Bogotá, mediante acto administrativo No. 640 del 31 de mayo de 2005, es decir, al 26 de julio de 2005, sin que la Administración realizara los actos que le correspondían para ejecutarla, es evidente que se configuraron los efectos establecidos por la precitada norma y la jurisprudencia, esto es, ha operado la pérdida de fuerza ejecutoria de los precitados actos administrativos por la causal establecida en el numeral 3° del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Alcaldía Local observa que es procedente declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 0282 del 05 de diciembre de 2002, que impuso la sanción a título de multa a la señora DIANA FERNANDA MOGOLLÓN CHAVEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.773.684 de Usaquén y, del Acto Administrativo No. 640 del 31 de mayo de 2005, dictado por el Consejo de Justicia de Bogotá, que en sede de apelación la modificó, tal y como se indicará en la parte resolutive del presente acto administrativo.

No obstante lo anterior, esta Alcaldía Local en cumplimiento de las facultades legales y constitucionales, en especial las de inspección y vigilancia, a través de personal adscrito al Área de Gestión Políciva -Oficina Jurídica se desplazó a la dirección donde opera el establecimiento de comercio que originó la apertura de la presente actuación administrativa, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos para su apertura y operación, evidenciándose, según acta de visita de fecha 02 de octubre de 2017, que dicha actividad ya no se desarrolla en el lugar, no obstante se encontró funcionando una actividad económica diferente "Sala de Belleza", la cual no acreditó los requisitos exigidos por el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, circunstancia por la cual se hace necesario ordenar el desglose de los folios 109 y 110, con el objeto de que sean remitidos a los Inspectores de Policía de esta Localidad para que acorde a sus competencias adelanten la actuación correspondiente.

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo señala que, en los aspectos no contemplados en dicho código se seguirá el Código de Procedimiento Civil hoy Código General del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones. Así las cosas, y como quiera que el archivo de los expedientes

RESOLUCIÓN No. _____

administrativos no tiene regulación especial se considera por este Despacho que se es necesario ampararnos en la normas de la ley adjetiva civil en lo que corresponde al archivo del expediente y que contempla la posibilidad de que una vez concluido el proceso, los expedientes deberán archivar, por lo tanto, teniendo en cuenta que este Despacho no va a adelantar otras acciones administrativas o jurídicas que impliquen mantener en estado activo el expediente, se procederá a ordenar su archivo, previo desglose del acta de visita levantada por el personal adscrito al Área de Gestión Políciva - Oficina Jurídica.

En mérito de lo expuesto la Alcaldía Local de Barrios Unidos,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **Declarar** la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 0282 del 05 de diciembre de 2002, que impuso la sanción a título de multa a la señora DIANA FERNANDA MOGOLLÓN CHAVEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.773.684 de Usaquén, en su calidad de propietaria y/o representante legal del establecimiento de comercio denominado "KERRIS", ubicado en la carrera 33 No. 91A-26 de Bogotá y, del acto administrativo No. 640 del 31 de mayo de 2005, dictado por el Consejo de Justicia de Bogotá, que en sede de apelación modificó la citada sanción, por las razones expuestas en la parte motiva de presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - **Ordenar** el archivo de las diligencias correspondientes al proceso sancionatorio No. 067 de 2000, iniciado a través del Auto de fecha 24 de mayo de 2000 en contra de la señora DIANA FERNANDA MOGOLLÓN CHAVEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.773.684 de Usaquén, en su calidad de propietaria y/o representante legal del establecimiento de comercio denominado "KERRIS", ubicado en la carrera 33 No. 91A-26 de Bogotá.

ARTÍCULO TERCERO. - **Ordenar** el desglose de los folios No. 109 y 110 con el objeto de que sean remitidos a los Inspectores de Policía de esta Localidad para que acorde a sus competencias adelanten la actuación correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO. - **Notificar** la presente Resolución a la señora DIANA FERNANDA MOGOLLÓN CHAVEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.773.684 de Usaquén, en calidad de propietaria y/o representante legal del establecimiento denominado "KERRIS", ubicado en la carrera 33 No. 91A-26 (antigua) carrera 49 No. 93-82 (actual) de Bogotá, en la forma prevista por el artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo – Decreto Ley 01 de 1984.

ARTÍCULO QUINTO. - Remitir copia de la presente decisión al Área de Gestión para el Desarrollo Local – Oficina de Contabilidad, para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO. - Remitir copia de la presente decisión a la oficina de asuntos disciplinarios, para lo pertinente.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - **Ordenar** al Área de Gestión Políciva Oficina Jurídica, que designe a quien corresponda, para que proceda a realizar la respectiva actualización de

559



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Barrios Unidos


100
2010

RESOLUCIÓN No. _____

los libros radicadores, Sistemas de Información "BASES DE DATOS" y aplicativo SI-ACTUA, con base en la decisión adoptada a través de este acto administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO. - Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE


ZICO ANTONIO SUÁREZ SUÁREZ
Alcalde Local de Barrios Unidos

Proyectó: Jorge Armando Solano Peña - Abogado Cobro Persuasivo
Revisó: Lisandro Gil Cruz - Asesor del Despacho


470